ÍNDICE.

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 13 DE MAYO DE 2013

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

1

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
25/2011	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD promovida por la Procuradora General de la República en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. (BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN)	3A5
36/2012	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD promovida por la Procuradora General de la República en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. (BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA)	6A16
56/2012	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD promovida por la Procuraduría General de la República, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila. (BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ)	17A24Y25 INCLUSIVE ENLISTA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

**SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 13
DE MAYO DE 2013**

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

JUAN N. SILVA MEZA

SEÑORES MINISTROS:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO ALBERTO
PÉREZ DAYÁN**

AUSENTE: SEÑOR MINISTRO:

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 12:40 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión pública ordinaria correspondiente al día de hoy. Señor secretario, sírvase dar cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración, el proyecto de acta de la sesión pública número 47 ordinaria, celebrada el jueves 9 de mayo del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señoras y Señores Ministros, está a su consideración el acta con la que se ha dado cuenta. Si no hay

observaciones, les consulto ¿Se aprueba en forma económica?
(VOTACIÓN FAVORABLE). ESTÁ APROBADA SEÑOR SECRETARIO.

Continuamos.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
25/2011. PROMOVIDA POR LA
PROCURADORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA EN CONTRA DE LOS
PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Bajo la ponencia del señor Ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Señoras y señores Ministros, como todos recordamos, en la última sesión ya abordamos el tema de fondo relativo a la propuesta de invalidez. Hemos alcanzado un resultado, ésta ha sido declarada inválida, han sido declaradas inválidas las normas impugnadas y nos estacionamos en el tema de los efectos de la invalidez declarada.

El señor Ministro Alberto Pérez Dayán ofreció hacerse cargo —como lo hizo— de una propuesta de efectos amplia, muy precisa en algunas situaciones que ha sido de nuestro conocimiento; sin embargo, parece que tenía que hacer algún comentario en relación con esta propuesta. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias señor Ministro Presidente, señoras Ministras, señores Ministros, tomando en consideración las observaciones destacadas y formuladas al último segmento de la ponencia que presenté a su alta consideración, les elaboré un replanteamiento sobre el tema específico. Hago también referencia y destaco que muchas de las conclusiones que se alcanzan en este documento, implican fechas, distintos regímenes, modificaciones,

momentos en que entró en vigor una ley y que llegó otro, que de alguna manera se relacionan vinculadamente con los dos siguientes asuntos que quedan a consideración de ustedes.

No sé si a efecto de robustecer esta decisión, sería conveniente y así se lo planteó señor Presidente, revisar las consideraciones de los dos siguientes asuntos, pues de ser votados de una u otra manera, adquirirían validez las cuestiones y los razonamientos que estoy presentando en este replanteamiento. De ser esto así, mucho rogaría esperáramos a esta determinación de los dos siguientes asuntos para definir, delinear el punto que yo les estoy haciendo de su conocimiento.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Pérez Dayán. Sí efectivamente recibimos la nueva propuesta en relación con los efectos y se hace cargo precisamente de esos cortes que sugerían aquí en la última ocasión en que se analizó este asunto; sin embargo, es cierto, que en los dos asuntos que vienen, si bien con sus propias características y particularidades, en tratándose de efectos y lo probable es que lleguemos allá en la discusión de los mismos, con las propuestas que se hacen por cada uno de los señores Ministros, en relación con ellos, tendríamos que aludir precisamente a los términos y fechas de los artículos transitorios, en relación con las fechas de los Decretos que están ahí y los principios que nos pueden llevar a hacer una determinación de efectos en relación con la Ley Reglamentaria, tratándose de la materia penal, en fin, tienen algunas cuestiones que definitivamente están vinculadas.

De esta suerte, haría yo una propuesta a partir de estas sugerencias señor Ministro, a las señoras y señores Ministros, lo siguiente: Que pudiéramos continuar con el análisis, inclusive hasta el fondo, de cada una de las Acciones de Inconstitucionalidad que continúan inmediatamente después de ésta para resueltos los temas de fondo de aquellas, pudiéramos dejar pendientes tal vez, para ver cómo se vinculan

éstas fechas, estos contenidos, en cada una de estas Acciones de Inconstitucionalidad y hacer un pronunciamiento general. Ciertamente, como dice el Ministro ponente, se involucran varias cuestiones que tal vez, vamos, si no tenemos el panorama completo ahorita en relación con esto, no queremos correr riesgo de alguna inconsistencia en este pronunciamiento de efectos, lo comparto con el señor Ministro Pérez Dayán, y si las señoras y señores Ministros están de acuerdo, éste lo dejaríamos encorchetado aquí; qué es lo que nos falta: La precisión de los efectos, hacer la declaratoria de invalidez que ya está tomada la votación en forma definitiva; vamos a entrar a las cuestiones procesales, y a la de fondo de cada uno de los otros temas que lo sabemos no son idénticos, pero sí similares en cuanto a su planteamiento sobre todo el de fondo en tanto se está alegando una invasión a la esfera de competencia de las Legislaturas locales frente a la Federación, en función de la ley general correspondiente. Si no hay algún inconveniente, vamos a hacerlo así, y si esto tiene la aquiescencia de las señoras y señores Ministros, a mano levantada se los consulto, **(VOTACIÓN FAVORABLE)**. **Dejamos entonces encorchetada esta acción**, y vamos a dar cuenta con la siguiente.

En la siguiente acción de inconstitucionalidad, no se encuentra –por cuestiones de aviso previo a la Presidencia – el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; tenemos conocimiento que el propio señor Ministro ha pedido al señor Ministro Cossío Díaz, me corregirá si no es así el dato que tengo, de que se hiciera cargo del asunto para dar cuenta y darle su seguimiento.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Encantado señor, muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sírvase dar cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2012. PROMOVIDA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CONTRA DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

Bajo la ponencia del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 280 BIS Y 280 TER, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y DEL ARTÍCULO 148, FRACCIONES I, PÁRRAFO SEGUNDO, Y VI, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL MISMO ESTADO, PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DOCE, y

TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTIFÍQUESE; "..."

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Señor Ministro José Ramón Cossío Díaz.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente, voy a permitirme leer la nota que el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea había preparado para la presentación de su asunto.

En la presente acción de inconstitucionalidad se impugnaron los artículos 280 Bis y 280 Ter, como lo citaba el Secretario General de Acuerdos hace un momento, del Código Penal, así como el artículo 148, fracciones I y VI del Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de Baja California Sur, publicados en el Boletín Oficial de esa entidad, el dieciséis de mayo de dos mil doce.

La promovente plantea que los preceptos impugnados vulneran los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de nuestra Constitución, porque el Congreso local no es competente para legislar respecto al delito de secuestro, pues conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 constitucional, dicha atribución es exclusiva del Congreso de la Unión, correspondiendo a las Legislaturas locales únicamente prevenir, perseguir y sancionar ese delito.

Como se decía, el proyecto está proponiendo declarar la invalidez de los artículos del Código sustantivo del Estado, por tipificar conductas de secuestro y establecer sanciones; lo que está reservado al Congreso, como también ya lo habíamos mencionado.

Señor Presidente, si a usted le pareciera y a los señores Ministros también, creo que podríamos analizar los cuatro primeros conceptos de invalidez relativos a competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Cossío Díaz, si quiere así lo haremos. Está a la consideración de las señoras y señores Ministros, los temas procesales a los que se ha hecho referencia por el señor Ministro Cossío Díaz. El Primero. Competencia. El Segundo. Oportunidad. El Tercero. Legitimación. El Cuarto. Causas de improcedencia que están a su consideración. Si no hay algún comentario,

les consulto si éstos son aprobados, y de manera definitiva, en forma económica. **(VOTACIÓN FAVORABLE). ESTÁN APROBADOS.**

Estamos en el Considerando Quinto, relativo al estudio de fondo. Señor Ministro Cossío Díaz.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Cómo no señor Presidente. El estudio de fondo va de las páginas diez a treinta y dos del proyecto, y aquí —como decíamos— se propone la declaración de invalidez de los preceptos que había yo señalado; ello es así, porque conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución, la atribución para legislar en materia de secuestro es exclusivo del Congreso de la Unión, mientras que a las Legislaturas locales corresponde únicamente prevenir, perseguir y sancionar este delito, lo que no comprende la posibilidad de establecer nuevos tipos penales en la materia ni establecer su sanción.

En el proyecto se señala que de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, primer párrafo de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión, expedir una Ley General en Materia de Secuestro debiendo establecer en ella como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, bajo dicho esquema corresponde a la ley general establecer los tipos penales y las hipótesis que deberán ser perseguidas localmente, lo que no autoriza a las entidades federativas a legislar en relación con los delitos respectivos ni requiere de una incorporación a los Códigos Penales locales, pues dicha ley general, permite a las autoridades de las entidades federativas conocer de los delitos federales tipificados en ella. En consecuencia, las entidades federativas —sigue diciendo el proyecto— están imposibilitadas para normar aspectos sustantivos en relación con el propio delito de secuestro.

Adicionalmente, ello iría en contra de la intención del Constituyente, que fue precisamente la unificación de criterios en la materia, facultando a un solo ente a emitir su normativa. Así los artículos 280 bis y 280 ter impugnados, al incorporar al Código Penal local el tipo de secuestro y las penas correspondientes, va más allá de la competencia de la propia Legislatura, por lo que el proyecto propone declarar su invalidez en virtud de que se invaden las esferas de atribuciones federales.

Por su parte, el artículo 148, fracción I, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales, si bien no prevé un tipo ni una pena, sino únicamente establece la calificativa de gravedad, ello impacta a los aspectos de investigación, persecución y sanción, lo cierto es que está referida también al tipo del homicidio doloso, y toda vez que en la Ley General para Prevenir, Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, no existe el citado tipo, atendiendo al principio de taxatividad, aquí ya no por competencia sino por taxatividad en materia penal, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, debe declararse la invalidez de dicha porción normativa en términos de la propuesta.

Lo mismo ocurre con la fracción VI, la cual prevé que la calificativa de gravedad se aplica al secuestro previsto y sancionado por los artículos 279, 280, 280 bis y 281, del Código Penal, los cuales fueron declarados inconstitucionales, por lo que ha lugar a declarar su invalidez en la porción normativa antes transcrita, pues al tratarse de una norma penal, no procede hacer una interpretación conforme. Esta sería básicamente la condición del proyecto del señor Ministro Zaldívar señor Presidente. Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossío. Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente. Yo vengo de acuerdo con el sentido de esta consulta; asimismo coincido con lo que ha dicho el señor Ministro Cossío en cuanto a la invalidez del artículo 148, fracción I, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales de aquel Estado, y también del artículo 148, fracción VI, del mismo Código procesal.

Sugiero muy respetuosamente a quien se ha hecho cargo de la consulta, que pienso debe declararse también la invalidez por extensión de los artículos 279, 280 y 281, del Código Penal, que guardan una relación sistemática con las normas que se impugnan en este ordenamiento al contenerse en el mismo capítulo denominado Secuestro, esa es la única sugerencia, por lo demás mi voto será a favor de la consulta. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Valls. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Si me permite, creo que está muy puesto en razón lo que dice el señor Ministro Valls, de la anulación de los artículos 279, 280 y 281, que además son los que están remitidos por la fracción VI de este artículo 148, entonces yo haría mía también su propuesta, y así estaría sometiendo el proyecto a consideración de ustedes.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Cossío. Continúa a consideración de las señoras y señores Ministros la propuesta modificada con la sugerencia hecha de los señores Ministros Valls y Cossío como ponente, a su consideración. Señora Ministra Luna.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente. Quisiera mencionar que estoy de acuerdo con el proyecto que ahora se nos está presentando, pero me resulta necesario hacer la aclaración de cuál es la

diferencia con el del señor Ministro Alberto Pérez Dayán; en el del señor Ministro Alberto Pérez Dayán, yo voté en contra porque aquí lo que existía era una calificativa al delito de secuestro que ya estaba establecido en la ley general y justamente remite la fracción XXI, del artículo 73 que se declaró inconstitucional, precisamente a la Ley General del Secuestro. Entonces, yo voté en contra porque ahí se trataba de una calificativa, no del establecimiento del tipo y la sanción correspondiente al delito de secuestro, situación que sí sucede en el asunto del señor Ministro Zaldívar, del que ahora se hace cargo el señor Ministro José Ramón Cossío. Por esta razón, en este asunto yo estaré de acuerdo porque se trata del tipo de secuestro y de su sanción, que sí considero que es competencia del Congreso de la Unión y no de la legislación ordinaria. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señora Ministra Luna Ramos. Si no hay alguna participación de la señora y señores Ministros, y no hemos escuchado objeción, la señora Ministra hace la aclaración de por qué este proyecto lo considera diferente. Si no hay alguna observación o voto en contrario, les consulto si se aprueba la propuesta con las modificaciones aceptadas y propuestas por el señor Ministro Cossío que se hace cargo del proyecto. Si esto es así, a mano levantada si están de acuerdo, por favor. **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí señora Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Nada más una aclaración. En el artículo 148, que también se declara inválido por extensión, está referido únicamente a la fracción I y a la VI -si no mal recuerdo- pero en la primera parte se califica como delito grave para efectos de privación de la libertad; entonces, esto también está contemplado en la ley general, no sé si también valdría la pena hacerlo extensivo por esta otra parte.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Venía como artículo 148, fracción I, párrafo segundo.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Párrafo segundo.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Entonces ¿Quedaría comprendido?

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: No, es otra parte.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: ¿Cuál? nada más para precisarlo señor Presidente.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Es que dice: “Se califican como delitos graves por aceptar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes: Privación ilegal de la libertad previsto y sancionado por los artículos tales”. Es la V.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: La V, perfecto.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Pero sólo en lo que se refiere a la privación ilegal de la libertad.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: A la privación de la libertad, sí.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Perdón, es que el secuestro es una modalidad de una conducta más genérica, que es privación. Perdón señor Presidente, privación ilegal de la libertad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, adelante.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: No sé si solamente debiera referirse al tema concretamente.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Sí, sólo referido al secuestro, sí.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Perfecto; entonces, las que vienen declaradas inválidas en la propuesta del proyecto del señor Ministro Zaldívar, son 148, fracción I, párrafo segundo, y después, fracción VI, en cuanto a la calificativa de gravedad que se aplica al secuestro previsto y sancionado por los artículos que ahí remiten. Entiendo que la señora Ministra lo que pide es que también de la fracción V, se lleve a cabo esta declaración; lo que sería importante es precisar la porción normativa de esa fracción V, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Informe la Secretaría por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro con gusto. La fracción V, del artículo 148 del Código Adjetivo mencionado señala: “Privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado por los artículos 276, 277 y 278 del Código Penal”.

Y si gustan, le puedo dar lectura a esos preceptos del Código Penal del Estado.

Artículo 276. “Al particular que legalmente prive a otro de su libertad por un término inferior a tres días, se le aplicará prisión de seis meses a cuatro años y multa hasta por cien días de salario mínimo vigente”.

Artículo 277. “La pena aplicable será de uno a ocho años de prisión y multa hasta por doscientos días de salario cuando la privación de la libertad exceda de tres días o concurra a alguna de las circunstancias siguientes: Fracción I. Se utilice violencia física o moral. Fracción II. La víctima sea menor de dieciséis años de edad o discapacitada mental. Y, fracción III. Se allane el domicilio de la víctima o se le detenga en paraje solitario”.

Artículo 278. “En el caso de robo con violencia en que se afecte la libertad de la víctima, con el sólo propósito de que ésta consiga el objeto o dinero que se le reclama o extraiga de cajeros automáticos o bancos las cantidades disponibles, no se considerará como delito autónomo la privación ilegal de la libertad si es liberada en menos de veinticuatro horas y no se le causan lesiones; en cualquier otro caso se considerará que existe además privación ilegal de la libertad, procediendo la acumulación de delitos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bien, haría yo esta observación: Pareciera que esta fracción a la que hace referencia la señora Ministra, se inserta en una de las especies del término genérico “Privación de la libertad”, recordemos todos que, y en muchas legislaciones existe, privación de la libertad, privación ilegal de la libertad donde no hay fin, vamos, de contenido sexual o como era antes en el rapto; en fin, ahora el secuestro, sino que es una modalidad. Señora Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Sí señor Presidente, tiene razón, perdón yo me equivoqué, no es la V, lo que pasa es que puede que ya estuviera subsumida en la que se está declarando invalida, es la fracción I, pero es el párrafo segundo.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Sí, que viene declarado.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Así es.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Exacto, y está declarado en la propuesta.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Dentro de ese párrafo, sí. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: No, muchas gracias a usted señora Ministra. Bien, superada esta observación de la señora Ministra confirmo a ustedes su votación a favor de la propuesta de fondo del proyecto, ya con las observaciones superadas también. **(VOTACIÓN FAVORABLE)**. Tome nota señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: De que tenemos en este tema, para efectos de la declaratoria de invalidez de lo propuesto, unanimidad. Bien, aquí el tema siguiente precisamente es el de los efectos. Efectivamente también en este proyecto habría que hacer algunos cortes como se ha sugerido, como se les ha dicho en cuanto a los términos de los artículos Transitorios, vigentes, etcétera, y su contenido.

Bien, entonces éste queda también encorchetado al tema genérico de efectos en esta problemática de estas acciones de inconstitucionalidad y seguimos con la cuenta del siguiente asunto. Señora Ministra Luna Ramos.

SEÑOR MINISTRA LUNA RAMOS: Señor Presidente, nada más hacer una aclaración por qué venía mi confusión, lo que pasa es que en el segundo resolutivo se dice: “Se reconoce la validez del artículo 148, fracción I”, y luego dice, en el tercer resolutivo: “Se declara la invalidez del artículo 148, fracciones I y VI”; entonces, yo creo que ahorita el señor Ministro Cossío me dice que van a hacer la corrección y yo creo que por esa razón también fue un poco mi confusión, porque se estaba declarando validez y al mismo tiempo se declara la invalidez, pero yo creo que a lo mejor precisar que incluso es el segundo párrafo de la fracción I, también.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Perfecto. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. Entiendo que como este asunto hay que definir los efectos, y está en prelación el asunto del Ministro Pérez Dayán, que votamos el jueves de la semana pasada en el fondo, la parte de los resolutivos, yo lo ajustaría para el momento en que se discutan éstos efectos, para que no hubiera ningún inconveniente, y también recogería los preceptos que extendimos validez, que planteó el señor Ministro Valls y que ya también están votados por unanimidad de votos, pero esto hasta el momento en el que hayamos definido el tema central de los efectos. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossío. Sí, perfecto, como lo señala usted, tenemos en la estructura de la propuesta del proyecto encorchetados el tema de los efectos, **la declaratoria final la haremos en su oportunidad en relación ya como revisemos que quedan los puntos decisorios que rigen los considerandos ya votados.** Dé cuenta con la siguiente, señor secretario, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2012. PROMOVIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONTRA DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA.

Bajo la ponencia del señor Ministro Valls Hernández, y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO: ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

SEGUNDO: SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ARTICULO 371, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR EXTENSIÓN LA DEL ARTÍCULO 372, EN LOS ACÁPITES DE LAS FRACCIONES I, II, III Y IV DEL MISMO ORDENAMIENTO, PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA PARTE FINAL DEL CONSIDERANDO CUARTO DE ESTA EJECUTORIA. Y

TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTIFÍQUESE “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente. Señoras Ministras, señores Ministros, el veintidós de octubre del año pasado la entonces Procuradora General de la República promovió esta Acción de Inconstitucionalidad solicitando la invalidez del artículo 371, párrafo primero, del Código Penal de Coahuila, reformado mediante Decreto número 81, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado, el veinticinco de septiembre de dos mil doce.

En el proyecto que someto a su consideración, después de determinar la competencia de este Tribunal Pleno para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, así como la oportunidad y la legitimación en su interposición, se declara la invalidez del precepto impugnado, así como por extensión la del artículo 372 en los acápites de las fracciones I, II, III y IV del mismo ordenamiento por los motivos que expondré al analizar el único concepto de invalidez planteado por la accionante.

Asimismo, es conveniente señalar que el seis de este mayo, se recibió un oficio del Delegado del Congreso del Estado de Coahuila, en el que informa sobre la aprobación de un Decreto que deroga por virtud de lo dispuesto en su artículo Tercero Transitorio, el artículo que aquí se impugna.

Sin embargo, como se señala en el propio oficio, lo cual ha sido constatado en la red jurídica interna de este Alto Tribunal, dicho Decreto aún no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, además de que por combatirse una norma de carácter penal aun cuando esto hubiese sucedido, ello no traería como consecuencia la cesación de efectos de la acción al poderse imprimir efectos retroactivos a la invalidez que en su caso se decretara, tal como se ha establecido por una mayoría integrante de este Pleno. Razón por la cual considero nada impide entrar al análisis del asunto.

Hasta aquí sería la presentación señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchísimas gracias señor Ministro ponente. Bien, someto a su consideración los temas procesales de esta acción: El Considerando Primero, competencia; el Segundo, la oportunidad; el Tercero, la legitimación.

¿Alguna observación en relación con alguno de estos temas? Si no es así les consulto si se aprueban de forma económica y de manera definitiva. **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

En el Considerando Cuarto se alude al estudio de fondo. Señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Sí señor, muchas gracias. El proyecto que someto a la elevada consideración de todos ustedes propone declarar procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad con base en las siguientes consideraciones: La reforma al artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, de la Constitución Federal, tuvo por objeto dotar al Congreso de la Unión de la atribución para expedir una ley general en materia de secuestro, que homologara los tipos y las penas y previera mecanismos de concurrencia y coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios mediante el diseño de una política integral y el establecimiento de acciones específicas de prevención y combate a este delito.

Y es que con anterioridad a esta reforma, el delito de secuestro era regulado por cada Estado de la República existiendo diversidad de tipos y penas, así como de estrategias de prevención, persecución y sanción, lo cual no permitía emprender una lucha efectiva contra la delincuencia.

De esta forma, al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer mediante una ley general los tipos y las penas en materia de secuestro, se privó a los Estados de la atribución con que anteriormente contaban en términos del artículo 124 de la Constitución Federal para legislar sobre esta materia –manteniendo, sin embargo– facultades para prevenir, investigar y castigar el referido delito, conforme al régimen de concurrencia y coordinación y demás lineamientos tratados por la ley general.

Pues bien, el veintinueve de noviembre de dos mil diez, el Congreso de la Unión en ejercicio de esta atribución expidió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del 73 de la Constitución, publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

De la lectura de las disposiciones relativas, se desprende que las atribuciones y responsabilidades que se otorgan a los diferentes niveles de gobierno son de naturaleza operativa para la prevención, la persecución y la sanción del delito de secuestro teniendo que actuar dentro de su ámbito de competencia conforme a los tipos y penas establecidos en esta ley.

Tanto los Transitorios de la reforma al 73, fracción XXI, párrafo primero de la Constitución, como los Transitorios de la ley general, establecen por un lado, que las disposiciones en materia de secuestro previstas tanto en el Código Penal Federal, como en los códigos penales de los Estados, seguirán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general, aplicándose a los hechos realizados durante su vigencia, así como a las personas procesadas o sentenciadas por tal delito, y por otro lado establece que los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley general, seguirán tramitándose hasta su conclusión y ejecución conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen.

De acuerdo por lo dispuesto por el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, ésta entró en vigor el veintiocho de febrero de dos mil once, fecha a partir de la cual las disposiciones en materia de secuestro, previstas en los códigos penales federal y estatales, perdieron de modo general su vigencia, rigiendo únicamente y de manera excepcional respecto de procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley general.

Con posterioridad a la entrada en vigor de la ley general, el Congreso del Estado de Coahuila, reformó entre otros, los artículos 371 y 372 del Código Penal del Estado, como se desprende del Decreto número 81, publicado en el Periódico Oficial el veinticinco de septiembre de dos mil doce, con objeto de aumentar los mínimos y máximos de las penas de prisión previstas para el delito de secuestro.

Al rendir ya su informe, el órgano legislativo local señaló que no desconocía la existencia de la ley general, pero que nada le impedía reformar –así lo dijo– las disposiciones locales anteriores a la fecha de entrada en vigor de dicha ley, y aún vigentes respecto de procesos penales iniciados con anterioridad a esa fecha.

Esto es erróneo desde mi punto de vista, puesto que el artículo Segundo Transitorio del Decreto, por el que se reformó el párrafo primero de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Federal, y Segundo y Quinto Transitorios del Decreto por el que se expidió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, disponen expresamente que los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley general, seguirán tramitándose hasta su conclusión y ejecución “conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última –o sea, de la ley general–, conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen, aplicándose –sigue diciendo– las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor de la ley general por los hechos realizados durante su vigencia”.

En este sentido, resulta claro que las disposiciones a que se refieren tanto el Constituyente Permanente como el Congreso de la Unión en los Transitorios de mérito, son aquellas que se encontraban vigentes en el momento de la comisión de los hechos delictivos que dieron origen a los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley general; esto es el veintiocho de febrero de dos mil once.

De este modo, aun cuando no se señale de manera expresa, debe entenderse que a partir de la entrada en vigor de la multicitada ley general, se privó a los Estados de la facultad de legislar en esta materia, no sólo con efectos hacia el futuro sino también hacia el pasado; con respecto de los hechos delictivos ocurridos antes de la entrada en vigor de la citada ley general, se aplicarán las disposiciones locales vigentes al momento de su comisión.

Consecuentemente, el Congreso de Coahuila no se encontraba facultado para reformar las disposiciones del Código Penal local, aplicables por excepción a procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley general, y mucho menos en perjuicio de los procesados o sentenciados, aumentando los mínimos y máximos de las penas de prisión previstas por el referido código para el delito de secuestro, por ser violatorio de los principios de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional.

De ahí que frente a la vulneración del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, en relación con los artículos 124 y 14 ya citados, todos de la Constitución, deba declararse la invalidez con efectos retroactivos al veinticinco de septiembre de dos mil doce, en que fue publicado el Periódico Oficial, el Decreto número 81 del artículo 171, párrafo primero del Código Penal de Coahuila, impugnado a través de la presente acción de inconstitucionalidad, así como por extensión la del artículo 372 en los acápites de las fracciones I, II, III y IV del mismo ordenamiento, también reformado mediante el referido Decreto, que aunque no fue combatido guarda una relación de dependencia con el primeramente citado al establecer las circunstancias en las que el delito de secuestro a que aquél se refiere será calificado y las penas correspondientes en estos casos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución, y 41, fracción IV, y 45, en relación con el 73 de la ley

reglamentaria de la materia. Hasta aquí sería el análisis de este único concepto de invalidez, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Valls. Voy a poner a la consideración de las señoras y señores Ministros este apartado del proyecto, solamente hasta lo referido en los temas de validez constitucional. El señor Ministro ha hecho referencia a alguna consecuencia en los efectos pero lo agotamos para efecto de darle esta consistencia en relación con los demás temas exclusivamente a la propuesta de invalidez que somete a nuestra consideración, la cual está a la suya señores Ministros. Señora Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente. También hacer la aclaración de que aquí se trata también del tipo penal y que por esa razón yo estaré de acuerdo con el proyecto del señor Ministro Valls en la declaratoria de invalidez por ser competencia del Legislador Federal. En cuanto se refiere a la extensión de la invalidez del artículo 372, dice que en los acápites de las fracciones, no sé bien, pero el texto no sólo en los puros encabezados, pero, bueno, ésa es nada más una cuestión a la mejor de redacción, estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señora Ministra.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señora Ministra, señor Ministro. Continúa a su consideración, si no hay alguna observación, no hemos escuchado diferendo o voto en contra, les consulto si se aprueba la propuesta de invalidez en los términos señalados. **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

Tome nota la Secretaría que aquí tenemos unanimidad también en este apartado.

Bien, conforme a lo propuesto y aprobado por las señoras y señores Ministros, en relación a dejar así señalados, encorchetados los temas de los efectos de estas tres acciones por este planteamiento que tienen similares o algún diferendo que pueda tener alguno de ellos, los tenemos así, por aprobados en cuanto a la propuesta de invalidez estas tres acciones de inconstitucionalidad, más allá de que los ajustes que se hagan inclusive en los puntos resolutivos que ya lo vimos en el anterior, y que desde luego será sometido a la consideración de cada uno de ustedes para efecto de hacer la votación correspondiente a los puntos decisorios y la declaratoria general de las acciones de referencia ya de manera definitiva.

Señoras y señores Ministros, quisiera hacerles una propuesta para estos efectos; **hemos dejado encorchetados el tema de los efectos para hacer la consulta de las precisiones de fechas y de los alcances en alguno de los casos en función de la problemática y temática que tienen para efecto de ver la interrelación que ahí tienen, y también dar la explicación de que tenemos pendientes por resolver y probablemente sea en las Salas otros asuntos con esa problemática donde va irradiar precisamente lo que aquí se decida en el Tribunal Pleno**, ésa es la razón de ser también que hay que hacer esta propuesta en el sentido de tener claramente definidos estas situaciones en función de todo lo que impacta en los otros asuntos de esta naturaleza que también están esperando su resolución.

Pero la propuesta final que quiero hacer al Tribunal Pleno, es en el sentido de que continuáramos con la lista ordinaria el día de mañana con las dos acciones que están ahí pendientes ahorita de otra temática, sí relacionadas, vinculadas con temas penales también, pero que están ahí, que son, ¿qué número señor secretario?

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Con gusto señor Ministro Presidente: La Acción de Inconstitucionalidad 26/2012 y la Diversa 24/2012.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: De acuerdo. Son las que serán motivo de análisis el día de mañana a partir de que este tema de efectos quede y para que no se viole, vamos hay un poco de holgura en estas definiciones de los tiempos y estamos ya con esas declaratorias de invalidez también cubiertos, no simplemente en ésa otra situación pero que sí preocupa para estos efectos de que ya el Pleno se ha decidido aquí para esto que irradia y que se verá probablemente en la Primera Sala de este Alto Tribunal.

Bien, no habiendo otros asuntos que tratar para esta mañana en la pública ordinaria los convoco a la privada que tendrá verificativo dentro de diez minutos en este mismo lugar. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 13:20 HORAS)